



Migración y Salud Primaria: Mitos y Retos Reales en la Atención Pública.

Por Miguel Jara Gómez

Posted on Julio 5, 2025

En los pasillos de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) en comunas como Santiago, Independencia, Antofagasta o El Monte, el acento de los usuarios revela una realidad demográfica que Chile ya no puede ignorar: cerca del 10% de la población nacional está compuesta por personas migrantes. La atención primaria de salud (APS), pilar del sistema público, ha debido adaptarse en silencio a esta nueva demanda. Pero, ¿cuáles son las cifras reales tras el debate?

Aporte fiscal que supera el gasto social

Lejos de ser una carga, la población migrante aporta más de lo que recibe. Estudios recientes muestran que los migrantes contribuyen con cerca de **US\$ 4.000 millones anuales al fisco chileno**, cifra equivalente al **1,3% del PIB** (Banco Mundial y PNUD, 2022). En contraste, el gasto estatal en servicios sociales para esta población (incluyendo salud, educación y vivienda) no supera los **US\$ 360 millones anuales** (Ministerio de Desarrollo Social, 2023). La balanza fiscal es ampliamente positiva y derriba el mito del supuesto costo excesivo de la migración.

Salud primaria: cobertura con tensiones

El sistema APS chileno se financia principalmente por un modelo per cápita: el Estado transfiere a los municipios una suma fija por cada persona inscrita activamente en su CESFAM. Este modelo, si bien progresivo, tiene una debilidad: **el desfase temporal**. Muchas personas migrantes llegan y se atienden sin estar registradas formalmente, lo que **sobrecarga centros locales sin financiamiento adicional inmediato**.

En comunas como Hualpén o Estación Central, se ha reportado que entre el 30% y 40% de los usuarios de salud primaria son migrantes (Departamento de Extranjería y Migración, 2023). Sin embargo, sus datos muchas veces no están actualizados en los sistemas de Fonasa ni reflejados en el padrón para transferencias fiscales, lo que limita la planificación y asignación efectiva de recursos.

Brechas de acceso: de lo legal a lo cultural

Si bien el 96% de las personas migrantes está afiliada a Fonasa (Superintendencia de Salud, 2023), su uso de los servicios de salud sigue siendo menor. Un estudio de la Encuesta Casen 2022 revela que solo el 65,6% accedió a prestaciones garantizadas por el GES/AUGE, frente al 78% de los nacionales. El miedo, la desinformación, la barrera idiomática y la discriminación sutil son factores que reducen el acceso real.

Los equipos de salud, por su parte, enfrentan dificultades por falta de capacitación intercultural, registros incompletos y ausencia de políticas públicas claras para planificar en contextos de alta variabilidad poblacional.

Éxitos silenciosos

En medio de los desafíos, también hay logros. En el CESFAM Ignacio Domeyko de Santiago, un programa piloto inscribió a más de 400 migrantes en 2016. El 100% cumplió con controles cardiovasculares y el 97% con controles prenatales. La salud mental, sin embargo, fue el área más relegada: solo el 11% accedió a atención (Ministerio de Salud, Informe APS Intercultural, 2017).

Organismos como la OPS han apoyado iniciativas como las Duplas Sociosanitarias, que en 2023 entregaron atención a más de 10.000 personas migrantes, mayoritariamente venezolanas, integrándolas efectivamente al sistema bajo Fonasa Tramo A (OPS Chile, 2024).

Más allá del mito

Chile enfrenta una transición demográfica con fecundidad en descenso y población envejecida. En ese escenario, la migración representa una oportunidad. La evidencia muestra que **las personas migrantes están ayudando a sostener el sistema**, tanto económica como demográficamente. La presión sobre la APS no es estructural, sino **circunstancial y corregible**.

Diversos estudios (CELADE-CEPAL, 2023) indican que los desafíos identificados —como la sobrecarga en centros de salud— se deben principalmente a rezagos en la inscripción formal, problemas de gestión local y falta de coordinación intersectorial. **Una mejor planificación territorial, la aceleración de procesos de regularización migratoria y la capacitación intercultural de los equipos de salud debiesen ser suficientes para garantizar que la APS mantenga y mejore su capacidad de respuesta.**

La APS chilena ha demostrado resiliencia. Lo que necesita ahora es visibilidad, inversión y voluntad política para consolidar un modelo de salud verdaderamente universal y sin apellidos, donde todas las personas, sin importar su nacionalidad, accedan de manera oportuna, digna y eficaz.

Por otra parte, lo que niega un acceso en cantidad y calidad suficiente a los servicios de salud, así como en educación y otras áreas, a la población toda, incluidos extranjeros y nacionales, es el carácter subsidiario del Estado el cual no garantiza derechos como corresponde, como sería en un Estado Social de Derechos.

Referencias

1. Banco Mundial & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). *Migración y desarrollo en Chile: Aportes económicos de la población migrante*. Banco Mundial y PNUD.
2. Ministerio de Desarrollo Social. (2023). *Informe anual de gasto social 2023*. Gobierno de Chile.
3. Departamento de Extranjería y Migración. (2023). *Boletín estadístico migratorio*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
4. Superintendencia de Salud. (2023). *Afiliación a Fonasa por nacionalidad: Informe 2023*. Gobierno de Chile.
5. Ministerio de Salud. (2017). *Informe APS Intercultural: Experiencias piloto en atención primaria*. División de Atención Primaria, Gobierno de Chile.
6. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2024). *Informe de implementación de Duplas Sociosanitarias en Chile*. OPS Oficina Chile.
7. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). *Migración internacional y servicios sociales en América Latina: Desafíos para la integración*. Naciones Unidas.
8. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). (2022). *Base de datos y resultados: Acceso a salud de la población migrante*. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.

Miguel Jara Gómez, colaborador de El Maipo, es antropólogo social, magister en Educación y Comunicador Social.

Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.